

**UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA DE DERECHO**



**Incorporación de los delitos de corrupción de funcionarios como
excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma
constitucional**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE
ABOGADO**

AUTOR

Jhannury Alexis Membrillo Hernandez

ASESOR

Freddy Widmar Hernandez Rengifo

<https://orcid.org/0000-0003-1575-8941>

Chiclayo, 2025

**Incorporación de los delitos de corrupción de funcionarios
como excepción a la inmunidad presidencial a través de una
reforma constitucional**

PRESENTADA POR
Jhannury Alexis Membrillo Hernandez

A la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
para optar el título de

ABOGADO

APROBADA POR

Katherinee Del Pilar Alvarado Tapia
PRESIDENTE

Freddy Ronald Centurion Gonzalez
SECRETARIO

Freddy Widmar Hernandez Rengifo
VOCAL

Dedicatoria

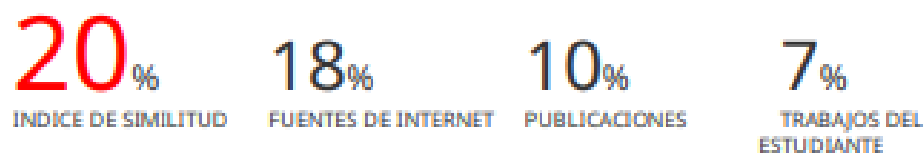
Con profunda estima y amor, dedico esta tesis a mis abuelas, Matilde Clorinda Anchay Santa Cruz y Etelvina Membrillo Diaz, por su sabiduría y apoyo constante. A mis padres, Juan Carlos Membrillo Membrillo y Pilar Elizabeth Hernandez Anchay, por su guía y confianza en mí. Y a mis hermanos, Aggie Kahory Membrillo Hernandez y Juan Carlos Membrillo Hernandez, por su compañía y aliento. Esta tesis es un homenaje a mi familia que me ha dado fuerza y apoyo en mi camino académico.

Agradecimientos

Con inmensa gratitud, elevo mi reconocimiento a Dios, por iluminar mi camino y brindarme la fortaleza necesaria para llevar a cabo este logro. Agradezco profundamente a mis abuelos Wenceslao Membrillo Salcedo y Segundo Salvador Hernandez Villalobos, quienes desde el cielo me han guiado y apoyado incondicionalmente. De igual manera, extendiendo mi más sincero agradecimiento a mi asesor de tesis, el Dr. Freddy Widmar Hernandez Rengifo, por su invaluable orientación, paciencia y conocimiento, que han sido fundamentales para la realización de este trabajo.

ARTICULO FINAL - MEMBRILLO HERNANDEZ JHANNURY ALEXIS.docx

INFORME DE ORIGINALIDAD



FUENTES PRIMARIAS

1	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
2	www.garciabelaunde.com Fuente de Internet	1%
3	tesis.usat.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	www.readbag.com Fuente de Internet	1%
5	wb2server.congreso.gob.pe Fuente de Internet	1%
6	dokumen.pub Fuente de Internet	1%
7	repositorio.unprg.edu.pe Fuente de Internet	1%
8	idoc.pub Fuente de Internet	1%
9	cdn.www.gob.pe Fuente de Internet	

Índice

Resumen	6
Abstract	7
Introducción.....	8
I. Revisión de Literatura	10
II. Materiales y métodos	17
III. Resultados y discusión	17
Conclusiones	28
Recomendaciones	29
Referencias bibliográficas.....	30
Anexos	34

Resumen

El propósito general de este estudio fue sugerir la regulación de los delitos de corrupción de funcionarios como una excepción a la inmunidad presidencial. Esto con el fin de prevenir el ejercicio arbitrario del poder político y el uso indebido de los recursos del Estado, mediante una reforma del Artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Para lograr esto, se llevó a cabo un diagnóstico, a través de entrevistas a especialistas en derecho constitucional, sobre la situación de esta problemática en la región de Lambayeque. Además, un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la inmunidad presidencial. Y, una explicación de los delitos de corrupción como excepción a dicha inmunidad, con el propósito de que el Presidente de la República no ejerza de forma arbitraria el poder político y no se utilicen indebidamente los recursos del Estado. Este estudio sigue un enfoque de investigación cualitativa, que permite realizar un análisis en profundidad y proporcionar una descripción detallada del tema de estudio. Los principales resultados indican la necesidad de limitar la inmunidad presidencial frente a actos de corrupción, siguiendo experiencias de otros países y cumpliendo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En conclusión, la incorporación de esta excepción contribuiría a reducir la impunidad, fortalecer el Estado de Derecho y promover el desarrollo socioeconómico del país.

Palabras clave: Corrupción, inmunidad presidencial, reforma constitucional, estado de derecho, desarrollo socioeconómico.

Abstract

The general purpose of this study was to suggest the regulation of corruption offenses by public officials as an exception to presidential immunity. This is in order to prevent the arbitrary exercise of political power and the misuse of state resources, through a reform of Article 117 of the Political Constitution of Peru. To achieve this, a diagnosis was carried out, through interviews with specialists in constitutional law, on the situation of this problem in the Lambayeque region. In addition, an analysis of the Constitutional Court's ruling on presidential immunity. And, an explanation of corruption offenses as an exception to such immunity, with the purpose that the President of the Republic does not arbitrarily exercise political power and state resources are not misused. This study follows a qualitative research approach, which allows for an in-depth analysis and a detailed description of the study topic. The main results indicate the need to limit presidential immunity in the face of acts of corruption, following the experiences of other countries and complying with the United Nations Convention against Corruption. In conclusion, the incorporation of this exception would contribute to reducing impunity, strengthening the rule of law, and promoting the socioeconomic development of the country.

Keywords: Corruption, presidential immunity, constitutional reform, rule of law, socioeconomic development.

Introducción

La presente investigación se enfoca en la propuesta de regular los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial en Perú. Esta problemática se manifiesta en los constantes escándalos de corrupción que han involucrado a trabajadores del Estado, incluyendo el jefe de Estado, quienes se han visto envueltos en actos de malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, entre otros.

Uno de los principales indicadores de esta situación problemática es el artículo 117 de la Constitución Política peruana, el cual otorga inmunidad al presidente, impidiendo que se pueda proceder penalmente contra él por delitos de corrupción. Esta situación genera efectos inmediatos y futuros preocupantes, pues fomenta la impunidad y el abuso de poder, deteriorando la confianza ciudadana en las instituciones del Estado y poniendo en riesgo el Estado de Derecho. Además, la corrupción a altos niveles tiene graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico del país, desviando recursos públicos que deberían destinarse a atender las necesidades de la población.

Entre las principales causas de este problema se encuentran la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder presidencial, así como la cultura de impunidad que ha prevalecido en Perú. Según datos de Proética, el 80% de peruanos considera que la corrupción es un problema grave en el país. Además, el Perú ocupa el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, con una puntuación de 38 sobre 100.

A nivel internacional, diversos países como Colombia, Chile y Argentina han adoptado medidas para limitar la inmunidad presidencial frente a delitos de corrupción. Además, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (CNUCC), tratado multilateral de la prevención y la lucha contra la corrupción, requiere de un enfoque integral multidisciplinario. En su artículo 30, la CNUCC precisa que los Estados deben adoptar medidas para establecer un equilibrio apropiado entre las inmunidades otorgadas a sus funcionarios públicos y la posibilidad de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos de corrupción

A nivel nacional, la Constitución de Perú establece en su artículo 117 las causales por las cuales el Presidente puede ser acusado durante su mandato, limitándolas a traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso en casos no previstos, o impedir su reunión o funcionamiento. Sin embargo, existe un debate sobre si esta inmunidad se refiere exclusivamente a la persecución penal o también impide el juicio político por otros delitos,

como los de corrupción. Puede agregarse que, si bien existen antecedentes de propuestas de reforma constitucional en este sentido, aún no se ha logrado concretar una solución efectiva.

En este contexto, se propone explorar la modificación constitucional para que los delitos de corrupción cometidos por el Presidente no estén protegidos por la inmunidad, permitiendo su investigación y sanción adecuada. Esta propuesta busca fortalecer el estado de derecho y la lucha contra la corrupción en el país, en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Perú

Por lo expuesto, la presente investigación plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué deberán regularse los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial en Perú?

El objetivo general de este trabajo es proponer la regulación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial, con la finalidad de que el presidente de la república no ejerza el poder político de manera arbitraria y se evite el uso indebido de los recursos del Estado, mediante una reforma del artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

Los objetivos específicos son: 1) Diagnosticar, mediante entrevistas a especialistas en Derecho Constitucional, sobre los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial en la región de Lambayeque; 2) Analizar la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a la inmunidad presidencial (STC N° 6-2003-PI/TC); y 3) Explicar los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial, con la finalidad de que el presidente de la república no ejerza el poder político de manera arbitraria y no se utilicen indebidamente los recursos del Estado.

Esta investigación es relevante porque contribuirá a generar un mayor control y rendición de cuentas sobre el ejercicio del poder presidencial, lo que beneficiará a la ciudadanía en general al fortalecer el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Además, los resultados de este estudio podrían servir de insumo para futuras reformas constitucionales en Perú.

I. Revisión de Literatura

Arnau Laura y Sala Josefina (2020) sitúan la revisión bibliográfica como una de las partes más importantes de la investigación porque ayuda al investigador a posicionarse en el estudio más allá de sustentar contenidos teóricos y conceptuales. Por lo tanto, se puede entender que la revisión de la literatura es la parte más relevante de la encuesta, ya que refleja las ideas principales tomadas de fuentes confiables, lo que le dará consistencia y confiabilidad a la encuesta.

1.1. Antecedentes

La revisión de los antecedentes es el primer paso de una revisión bibliográfica exhaustiva, ya que permite identificar los estudios previos relacionados con el tema de investigación, según **Gómez (2023)**. Esto facilita la comprensión del problema y la delimitación del objeto de estudio, evitando duplicar esfuerzos y aportando una perspectiva más amplia sobre el fenómeno a investigar.

Paredes Blanca (2020) en su tesis para optar el grado académico de maestro en Derecho con mención en Ciencias Penales, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, titulado “**delitos de corrupción de funcionarios y servidores públicos en los gobiernos locales**” busca brindar a la comunidad científica conclusiones concretas sobre un tema que viene generando importantes debates y divisiones en nuestro país, convirtiéndolo en un tema de trascendencia en la sociedad peruana debido al impacto jurídico, social y económico de la Comisión Índice de Crecimiento en el delito de malversación.

Se relaciona con la investigación actual en cuanto se refiere a: 1) las atribuciones y principios rectores de la administración pública; 2) la apropiación indebida de recursos estatales; 3) las medidas de control, inspección y fiscalización de funcionarios; 4) la falta de transparencia en la toma de decisiones gubernamentales; y 5) los tipos penales de corrupción de funcionarios en la legislación peruana.

Ramos Jeziel, Flores Adriana y Muñoz María (2020) en su tesis para optar el grado académico de maestro en Derecho de la empresa, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, titulado “**tratamiento de la corrupción y la implementación de la norma técnica peruana (NTP) ISO3701 como mecanismo de prevención**” tiene como objetivo determinar la importancia de la correcta implementación de la norma técnica peruana ISO 37001 (NTP) en los sectores público y privado, teniendo en cuenta que nuestro país es considerado uno de los más corruptos de América Latina.

Se relaciona con la investigación actual, ya que aborda diversos aspectos relevantes en

torno a la problemática de la corrupción en Perú, como el rol del gobierno, el marco normativo, el rol del Congreso, los organismos de control, el sistema de control de las entidades públicas y la corrupción desde la perspectiva del Derecho Penal, la imputación de funcionarios públicos y personas jurídicas, así como la Comisión de Alto Nivel de Corrupción.

Lázaro Raúl (2020) en su tesis para optar el grado académico de Doctoren Derecho y Ciencia Política, la Universidad Mayor de San Marcos, titulado “**límites y contenido de la acusación constitucional, el antejuicio político y el juicio político en el ordenamiento jurídico peruano**”. El propósito principal de esta tesis es examinar los límites y el contenido de las acusaciones constitucionales, los antejuicios y los juicios políticos en el sistema jurídico peruano.

Se relaciona con la investigación actual, ya que el análisis de estos mecanismos de control político y los fundamentos teóricos del neoconstitucionalismo brindan una base jurídica sólida para comprender y evaluar la viabilidad y necesidad de implementar una reforma constitucional que incluya los actos de corrupción oficial como excepción a la inmunidad presidencial.

Chamorro Alcides (2021) en su tesis para optar e grado académico de magister con mención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, la Universidad Alas Peruanas, titulado “**la acusación constitucional como límite de la investigación fiscal y judicial en el Perú 2020**”. El objetivo central de este trabajo de tesis es analizar el juicio político como límite a las investigaciones fiscales y judiciales en Perú, centrándose particularmente en la dinámica entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como en los organismos constitucionales autónomos como el Ministerio Público.

Esta tesis se relaciona con la investigación actual, ya que aborda dos temas clave: i) el juicio político como límite a las investigaciones fiscales y judiciales en Perú; ii) La reforma constitucional que incluiría los actos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial.

Ambos temas se ubican dentro del derecho constitucional y los derechos humanos, con la finalidad de fortalecer el sistema judicial y garantizar la rendición de cuentas de los servidores públicos. El análisis del juicio político y su interacción con los diferentes órganos de poder provee un contexto relevante para comprender las implicaciones de una reforma constitucional que permita procesar a los presidentes por actos de corrupción, lo cual contribuiría a combatir la impunidad y promover la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder estatal.

Palomino Joel (2020) en su tesis para obtener el título profesional de Abogado, la Universidad de Cesar Vallejo, titulado “**la inmunidad Presidencial y la acusación del**

Presidente de la República del Perú por la comisión de delitos en el ejercicio de su mandato". Tiene como objetivo principal analizar el tratamiento del Derecho Constitucional relacionado a la acusación del Presidente de la República del Perú por la comisión de delitos en el ejercicio de su mandato, a través del mecanismo del "Antejuicio".

Este trabajo de tesis aborda la protección que la Constitución Política de 1993 otorga al Presidente de la República, y propone una modificación parcial de los artículos 117 y 113 para incluir los actos de corrupción oficial como una excepción a la inmunidad presidencial.

Salinas Pamela (2022) en su tesis para optar el grado académico de licenciatura en Derecho, la Universidad Mayor de San Andrés, titulado **"tratamiento jurídico legal del delito de enriquecimiento ilícito en la función pública y recuperación de activos"**. El propósito es examinar el abordaje jurídico del delito de enriquecimiento ilícito en la legislación boliviana, considerando principios fundamentales del derecho internacional, constitucional y penal, con el fin de prevenir y combatir la corrupción.

Este trabajo de tesis se relaciona con la investigación actual desde la perspectiva del derecho comparado. En el caso de Bolivia, se reconoce la Responsabilidad Política del Presidente, entendida como la corrupción de políticos o quienes ejercen el poder político. Esto se regula a través de la Constitución Política del Estado boliviana: i) el Artículo 161 establece que las cámaras se reunirán en Asamblea Legislativa para autorizar el enjuiciamiento del Presidente; y ii) el Artículo 184 otorga al Tribunal Supremo de Justicia la atribución de juzgar al Presidente por delitos cometidos durante su mandato.

Estos aspectos vinculados a la responsabilidad y procesamiento del Presidente por delitos como la corrupción, aportan un contexto relevante para comprender los mecanismos constitucionales y legales existentes en Bolivia para combatir la impunidad y promover la transparencia en el ejercicio del poder público.

1.2. Bases teóricas

Las bases teóricas de una investigación deben incluir el sustento de la misma a través del análisis de teorías, conceptualizaciones, perspectivas teóricas, investigación previa y contexto general que se consideren relevantes y válidos para el marco de investigación adecuado (**Díaz, 2022**).

Por lo tanto, en respuesta a la presente investigación, se proponen las siguientes teorías.

1.2.1. Teoría de la Constitución

La teoría de la constitución se refiere al estudio de los principios, estructuras y funciones fundamentales de una constitución. Examina los fundamentos filosóficos, políticos y legales

de la constitución, y proporciona una base conceptual para entender su naturaleza y propósito.

La teoría de la constitución aborda temas como la soberanía, la separación de poderes, los derechos fundamentales, el gobierno y la interpretación constitucional. También estudia la relación entre la constitución y el sistema legal.

En el contexto jurídico, la incorporación de la corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional se basa en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder político. Esto estaría en línea con principios de legalidad, igualdad y responsabilidad de los funcionarios, además de los compromisos internacionales contra la corrupción.

Teniendo en cuenta ello, en esta investigación se abordaran las siguientes teorías:

1.2.1.1. El Poder de Reforma Constitucional

El poder de reforma constitucional se refiere al conjunto de principios y normas que rigen el proceso de modificación o enmienda de una constitución. Este poder es fundamental para mantener la flexibilidad y adaptabilidad de un sistema constitucional, permitiendo que la carta magna evolucione junto con las necesidades cambiantes de la sociedad (**Gutiérrez Sanz, 2023**).

Esta teoría señala que, a diferencia del Poder Constituyente que es soberano y libre, el poder de reforma constitucional aparece reglado y ordenado en la propia Constitución, convirtiéndose en un poder jurídicamente limitado.

La teoría del poder de reforma constitucional analiza los diferentes mecanismos y procedimientos establecidos en las constituciones para su propia reforma, tales como la iniciativa, el debate, la aprobación y la promulgación de las enmiendas (**Martínez Ruano, 2022**). Asimismo, examina los límites y restricciones que pueden existir sobre este poder, con el fin de preservar la estabilidad del orden constitucional (**Campos Vidal, 2024**).

La teoría del poder de reforma constitucional es fundamental para entender la posibilidad de incorporar los delitos de corrupción como excepción a la inmunidad presidencial en Perú. Este poder permite a los órganos competentes modificar la Constitución según las necesidades y evolución de la sociedad.

La incorporación de los delitos de corrupción como excepción a la inmunidad presidencial implicaría una reforma del artículo 117 de la CCP, con el objetivo de evitar el uso arbitrario del poder político y el abuso de los recursos estatales, promoviendo la justicia, transparencia y responsabilidad de los gobernantes. Todo esto dentro del respeto a los procedimientos

constitucionales, principios democráticos y compromisos internacionales contra la corrupción.

1.2.2. Teoría del antejuicio político

El antejuicio político es un procedimiento parlamentario cuyo objetivo es retirar la inmunidad o prerrogativa funcional de altos funcionarios estatales, como el presidente de la República, para que puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. A diferencia del juicio político, que es esencialmente de naturaleza política, el antejuicio es un procedimiento de carácter político-jurisdiccional que tiene por finalidad hacer efectiva la responsabilidad jurídica de estos funcionarios.

La teoría del antejuicio político se refiere a los mecanismos jurídicos y políticos que permiten a los funcionarios públicos eludir responsabilidades penales por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos. Según **Pérez (2023)**, este fenómeno se ha convertido en una práctica generalizada que beneficia principalmente a la clase política dirigente, socavando los principios de igualdad ante la ley y rendición de cuentas.

Ciertas reformas legales han ampliado las causales y procedimientos del antejuicio político, lo cual incrementa los niveles de impunidad y debilita los sistemas de pesos y contrapesos en los regímenes democráticos, según lo que profundiza **Gutiérrez (2022)**. Estas modificaciones normativas otorgan mayores prerrogativas a los funcionarios públicos para evitar ser sometidos a procesos judiciales, incluso en casos de presuntos delitos graves.

Esta teoría evidencia cómo los mecanismos jurídicos de protección a funcionarios públicos, como la inmunidad presidencial, pueden ser utilizados para evadir responsabilidades penales, especialmente en casos de corrupción. Un análisis crítico de estos privilegios, a la luz de los principios de igualdad y rendición de cuentas, resulta fundamental para diseñar reformas constitucionales que limiten la impunidad y fortalezcan la lucha contra la corrupción de altos funcionarios, incluyendo el jefe de Estado.

1.2.3. Teorías en cuanto al objeto de protección en los delitos contra la administración pública

1.2.3.1. Teoría de la protección de la fidelidad al Estado (“deber del cargo”)

La teoría de la protección de la fidelidad al Estado se fundamenta en la obligación legal y ética que tienen los funcionarios públicos de actuar de manera leal y fiel hacia el Estado y sus instituciones (**Guzmán Napurí, 2023**). Cuando un servidor público comete delitos contra la administración pública, su conducta ilícita se considera una grave infracción a este deber específico que tienen en virtud de su cargo y la confianza depositada en ellos por el Estado (**Hernández Rojas, 2023**).

Desde esta perspectiva, el injusto penal en este tipo de delitos no se agota únicamente en el daño o perjuicio causado a la entidad pública, sino que radica principalmente en la vulneración de los deberes inherentes a la función pública (**Ramírez Guzmán, 2022**). El funcionario que traiciona la confianza del Estado y abusa de su posición de poder comete, además, una grave falta ética que merece una severa sanción (**Valdivia Jara, 2024**).

Según esta teoría, los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial de actuar de manera imparcial, objetiva y sin conflictos de interés, priorizando el interés general y el cumplimiento de la ley por sobre intereses personales. La fidelidad al Estado y el deber del cargo implican que los funcionarios deben comprometerse con el servicio público y actuar conforme a principios y valores constitucionales y legales.

La corrupción de funcionarios atenta directamente contra la fidelidad al Estado, al implicar el uso indebido de recursos y abuso de poder en beneficio personal. Incorporar los delitos de corrupción como excepción a la inmunidad presidencial busca garantizar la responsabilidad y rendición de cuentas de altos funcionarios, fortaleciendo la fidelidad al Estado y evitando el ejercicio arbitrario del poder político.

1.2.3.2. Teoría de la buena imagen, dignidad o prestigio de la administración pública

El bien jurídico genérico protegido por los delitos funcionariales es la confianza y credibilidad que los ciudadanos deben tener en sus instituciones públicas. El comportamiento irregular o ilícito de los servidores públicos se considera un grave atentado contra esa imagen de probidad y honorabilidad que toda la administración debe mantener frente a la sociedad (**Mendoza Ayma, 2023**).

Desde esta perspectiva, los delitos cometidos por funcionarios no solo dañan intereses particulares o patrimoniales, sino que afectan seriamente la percepción y reputación de la entidad a la que pertenecen (**Gutiérrez Ticse, 2022**). Esto resulta especialmente grave, ya que la confianza pública es un activo fundamental para el adecuado funcionamiento de las instituciones y el ejercicio legítimo del poder estatal (**Paredes Infanzón, 2024**).

La buena imagen y confianza ciudadana en el gobierno son esenciales para el funcionamiento efectivo de la democracia. Una administración pública con prestigio tiene mayor capacidad para obtener apoyo y cooperación de los ciudadanos, facilitando la implementación de políticas.

Incorporar la corrupción como excepción a la inmunidad presidencial enviaría un mensaje de que nadie está por encima de la ley y de que no se tolerará la corrupción. Esto buscaría fortalecer la dignidad, prestigio y confianza ciudadana en la administración pública,

promoviendo la transparencia, la ética y la responsabilidad en el ejercicio del poder político.

1.3. Categorías conceptuales

Las categorías se definen como valores diferenciados, mientras que las alternativas son formas claras de clasificar, conceptualizar o codificar términos o expresiones sin generar confusión. Dentro de estas alternativas se ubican y clasifican los elementos o unidades de análisis (**Campos Rodríguez, 2022**). Por otro lado, la categorización consiste en asignar conceptos a un nivel más abstracto, permitiendo agrupar conjuntos de conceptos o subcategorías. Este proceso de categorización también implica establecer posibles relaciones entre los conceptos sobre un mismo fenómeno (**Ramírez Grajeda, 2023**).

En ese sentido, estos autores señalan que las categorías son conceptos derivados de los datos, que representan fenómenos, es decir, ideas analíticas relevantes que surgen de los datos.

1.3.1. Delitos de corrupción de funcionarios

Los delitos de corrupción de funcionarios en el Código Penal peruano se refieren a prácticas de oferta, compra o venta de actos funcionales o disfuncionales que los funcionarios públicos deben realizar, representando formas activas o pasivas de cohecho y soborno que afectan la imparcialidad y el desempeño de las funciones públicas (**Prado Saldarriaga, 2022**). Estos delitos buscan desvirtuar la gestión de los organismos estatales destinados a satisfacer el interés público y los fines del Estado, por lo que están tipificados en el Código Penal (**Portal Digital Único del Estado Peruano, 2023**). Adicionalmente, la corrupción de funcionarios implica un claro y abierto rompimiento del orden jurídico, contra el Estado y la Administración Pública, siendo un acto de desviación, perversión, deslealtad o pérdida de valores éticos (**Bustamante Romero, 2024**).

Estos delitos son un llamado de atención sobre la falta de seguridad jurídica y controles por parte del Estado, afectando la democracia y el buen gobierno en Perú (**Fernández Túpac, 2023**).

Por lo tanto, los delitos de corrupción son especiales y graves, pues socavan la integridad y transparencia de las instituciones públicas, así como el Estado de derecho, con consecuencias perjudiciales para la economía, la justicia y la confianza ciudadana.

1.3.2. Inmunidad presidencial

La inmunidad presidencial es una antigua institución en el constitucionalismo peruano, que ha sido recogida casi inalterablemente en la Constitución Política de 1993, protegiendo al presidente de la República en todo momento, incluso en los modelos semipresidencialistas o presidencialistas adoptados (**Olivares Bueno, 2022**). Sin embargo, se considera que esta institución carece de sustento político y legal, ya que no hay razón para proteger a un presidente

de la corrupción o delitos comunes cometidos durante su mandato (**Guzmán Napuri, 2023, citando a Cairo Roldán**). Además, se señala que la inmunidad solo protege al presidente y vicepresidente mientras ejercen su función, por lo que si los hechos fueron anteriores o posteriores a su posesión, se requiere autorización legislativa (**Oyarte Martínez, 2022**).

Entonces, la inmunidad presidencial otorga privilegios y protecciones legales al presidente o jefe de Estado en ejercicio, buscando garantizar la independencia y adecuado funcionamiento del cargo ejecutivo. Esto puede incluir inviolabilidad, inmunidad de arresto y de jurisdicción.

Si bien la inmunidad no implica impunidad absoluta, su aplicación genera controversias en casos de presuntos delitos graves o violaciones de derechos humanos. Algunos autores cuestionan la justificación política y legal de esta institución.

II. Materiales y métodos

La investigación se basa en el paradigma interpretativo, donde **Roca (2020)** considera que los investigadores interpretativos se enfocan en comprender y dar sentido a las experiencias humanas, valores, creencias e interpretaciones subjetivas.

El tipo de investigación es de carácter práctico, caracterizado por **Cravino (2020)** como orientado a abordar problemas concretos y encontrar soluciones aplicables en el mundo real.

El método utilizado es el analítico-sintético, donde según **León et al. (2020)**, el análisis descompone el problema en sus partes para examinarlas individualmente, mientras que la síntesis integra los elementos para construir un conocimiento más completo.

Las técnicas de investigación incluyen el análisis de documentos, la entrevista y la ficha de análisis de sentencias del Tribunal Constitucional. Además, se utilizará un cuestionario como instrumento de recolección de datos, tal como señala **Vásquez (2022)**.

III. Resultados y discusión

En el presente capítulo, se tratará de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial, teniendo en cuenta los impactos y consecuencias de la corrupción, posteriormente se analizará los tipos de delitos de corrupción de funcionarios de acuerdo al código penal. Asimismo, se llevará a cabo un análisis de jurisprudencia sobre el antejuicio al presidente de la República. Finalmente, se presentará los resultados de las entrevistas a especialistas en derecho constitucional respecto de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial, teniendo en cuenta primero una interpretación sistemática del artículo 117 de la Constitución y posterior a ello un análisis de las entrevistas.

3.1. Los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial

En este apartado, se lleva a cabo dos posturas, la primera de ellas es ver los impactos

significativos y las consecuencias perjudiciales que trae consigo la corrupción en las instituciones públicas del Estado; y como segundo apartado se analiza los delitos de corrupción de funcionarios de acuerdo a nuestro Código Penal.

3.1.1. Impactos y consecuencias de la corrupción

La corrupción en el sector público se relaciona con diversos factores como la falta de controles efectivos y debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones públicas, insuficiente transparencia en la gestión de los recursos públicos y ausencia de sanciones disuasivas para actos de corrupción que propician que algunos individuos aprovechen su posición de poder para beneficiarse indebidamente. Cuando los funcionarios públicos perciben su entorno laboral como un espacio propicio para abusar de su autoridad, ya sea en entidades públicas o privadas, surge la tentación de incurrir en prácticas corruptas (**Huamán Sialer, 2022**).

Estas personas, que cuentan con atribuciones y poder de decisión, sucumben a la tentación de cometer actos de corrupción debido a la disponibilidad de recursos y su capacidad de influencia. Aprovechan su posición para obtener beneficios personales de manera ilícita, lo cual es profundamente preocupante.

Es necesario tomar acciones concretas para evitar que esto ocurra. Se deben fortalecer los mecanismos de control y promover la integridad tanto en el sector público como en el sector privado. Las instituciones y organizaciones se crean para servir al bien común, no para enriquecer a unos pocos de manera deshonesta.

Es fundamental fomentar una cultura de ética y responsabilidad en todos los niveles de la sociedad. Se debe educar y concienciar a las personas sobre los riesgos y las consecuencias de la corrupción, y promover los valores de transparencia, honestidad y justicia.

La corrupción tiene un impacto perjudicial en la imagen y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas (**Quispe Farfán, 2023**). En el ámbito económico, sus efectos a largo plazo se traducen en una disminución de la inversión en el país, lo que tiene un impacto negativo en la generación de empleo.

La corrupción por parte de los funcionarios también tiene efectos negativos en la economía de un país. Genera una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales por parte de la población, lo que debilita la credibilidad en la gestión pública (**Hilario, 2022**). Además, la impunidad en los delitos de corrupción alimenta la creencia errónea de que los funcionarios pueden infringir las leyes sin consecuencias adecuadas.

La corrupción tiene impactos significativos y consecuencias perjudiciales en diversos aspectos de la sociedad y la economía. Uno de estos impactos es el deterioro de la confianza y

legitimidad institucional. Cuando los funcionarios públicos se involucran en prácticas corruptas, se genera desconfianza en la sociedad y se debilita la legitimidad de las instituciones gubernamentales.

La corrupción también genera desigualdad y exclusión social. Los recursos públicos desviados hacia actos corruptos no se destinan a servicios esenciales, lo que afecta especialmente a las personas más vulnerables de la sociedad.

En el ámbito económico, la corrupción tiene un impacto negativo en el crecimiento y el desarrollo sostenible. La asignación ineficiente de recursos y la distorsión de los mercados dificultan la atracción de inversiones y la generación de empleo. Además, puede desalentar la inversión extranjera y afectar el clima empresarial.

En contraste, los impactos y consecuencias de la corrupción en el sector público aportan sólidos fundamentos para justificar la necesidad de excepciones a la inmunidad presidencial cuando se trate de delitos de corrupción cometidos por altos funcionarios. Se demuestra cómo el abuso de poder abre las puertas a la corrupción, con efectos perjudiciales en la economía, la confianza ciudadana y la calidad de los servicios públicos. Esto respalda la importancia de limitar el uso indebido del poder y los recursos del Estado por parte del presidente, fortaleciendo los mecanismos de control, rendición de cuentas y aplicación efectiva de la justicia en casos de corrupción. En definitiva, se proporciona un sólido fundamento para establecer excepciones a la inmunidad presidencial, con el fin de prevenir el ejercicio arbitrario del poder político y el uso indebido de los recursos del Estado.

3.1.2. Análisis a los tipos de delitos de corrupción de funcionarios, en la legislación de Perú

En este apartado, luego de examinar el impacto y las consecuencias de la corrupción, se analiza los tipos penales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico nacional (código penal) para tener una mayor comprensión de los delitos que se cometen en actos de corrupción.

El Código Penal peruano contempla diversos delitos de corrupción de funcionarios, que incluyen el cohecho pasivo propio (artículo 393), el cohecho pasivo impropio (artículo 394), el cohecho pasivo específico (artículo 395), la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales (artículo 396), el cohecho activo genérico (artículo 397), el cohecho activo transnacional (artículo 397-A), el cohecho activo específico (artículo 398), la negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo (artículo 399), el tráfico de influencias (artículo 400) y el enriquecimiento ilícito (artículo 401). Además, se ha constatado que los mecanismos existentes en el ámbito del Derecho Penal para combatir el delito de corrupción son eficaces y apropiados, y que las medidas punitivas y las sanciones son adecuadas, centrándose principalmente en la

represión (Vallejos, 2023).

Según el análisis sobre los tipos de delitos de corrupción de funcionarios establecidos en el Código Penal peruano, la legislación nacional contempla una amplia gama de conductas corruptas que abarcan tanto el cohecho pasivo como el activo, la corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, la negociación incompatible, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Estos delitos reflejan la diversidad de acciones fraudulentas que pueden ser cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos (Ramos et al., 2020).

No obstante, es importante considerar que la prevención de la corrupción también es fundamental para combatir este problema de manera integral. Además de las medidas represivas, es necesario implementar estrategias que promuevan la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en el sector público. Esto implica fortalecer los mecanismos de control interno, fomentar la participación ciudadana, mejorar la capacitación y la formación ética de los funcionarios, y promover una cultura de integridad en la sociedad.

Cabe concluir que en relación a la inmunidad presidencial, los delitos de corrupción de funcionarios deben ser considerados como una excepción a dicha inmunidad. La lucha contra la corrupción requiere que ningún funcionario, incluyendo al presidente, esté por encima de la ley. Es fundamental garantizar que se investiguen y sancionen debidamente los actos de corrupción cometidos por altos funcionarios, sin importar su cargo. Esto fortalecerá la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuirá a consolidar un sistema de justicia transparente y equitativa.

3.2. Análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional: STCN° 6-2003-PI/TC, respecto a la inmunidad presidencial.

En este análisis jurisprudencial, se examina la sentencia del Tribunal Constitucional que aborda el proceso de acusación al Presidente de la República en Perú, las facultades del Congreso para imponer sanciones y la importancia de preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público en el marco del antejuicio político.

Según la sentencia (Tribunal Constitucional, 2003, p. 7 - 9), el artículo 117° de la Constitución establece los delitos por los cuales el Presidente puede ser acusado, limitándolos a traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento. Para que proceda la acusación constitucional, se requiere la votación favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, sin la participación de la Comisión Permanente.

El Congreso tiene la facultad de imponer sanciones por delitos declarados como tales por el Poder Judicial, según el artículo 89° de su Reglamento. Sin embargo, esta facultad no permite imponer sanciones por delitos que no hayan sido declarados previamente por el Poder Judicial.

Esto se fundamenta en el principio de separación de poderes y el principio de presunción de inocencia. El Congreso solo puede imponer sanciones políticas por delitos cometidos por funcionarios públicos cuando dichos delitos han sido declarados previamente por el Poder Judicial en una sentencia firme.

Las sanciones penales impuestas por el Poder Judicial y las sanciones políticas impuestas por el Congreso tienen diferentes fundamentos: la protección del bien jurídico en el caso de las sanciones penales y la protección del Estado en el caso de las sanciones políticas. La condena penal impuesta por el Poder Judicial es un requisito previo para la imposición de sanciones políticas por parte del Congreso (**Palomino, 2020**).

El antejuicio político no debe afectar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. El Tribunal Constitucional ha expresado preocupación por disposiciones que podrían interferir en la persecución e investigación del delito, como los plazos establecidos para la presentación de denuncias y la apertura de instrucción por parte del Poder Judicial. Estas disposiciones son consideradas contrarias al principio de separación de poderes y deberían respetar la autonomía del Ministerio Público y la independencia de la función jurisdiccional (**Lázaro Raúl, 2020**).

Por lo que, en el proceso de antejuicio político, que se basa exclusivamente en cuestiones legales, el Congreso tiene la facultad de presentar una acusación y suspender las funciones del funcionario, pero no puede imponer sanciones. La acusación requiere la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Una vez que el funcionario ha sido condenado judicialmente, el Congreso puede aplicar las sanciones establecidas en el primer párrafo del artículo 100° de la Constitución. En este caso, basta con una mayoría simple para aprobar dichas sanciones.

En definitiva, el análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional **STCN° 6-2003-PI/TC** respecto a la Inmunidad Presidencial en Perú revela la importancia de salvaguardar el debido proceso y la separación de poderes en el marco del antejuicio político. Se establece claramente que el Congreso tiene la facultad de presentar una acusación contra el Presidente de la República y suspender sus funciones, pero no puede imponer sanciones por delitos que no hayan sido previamente declarados por el Poder Judicial. La sentencia destaca la necesidad de preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público en la persecución e investigación del delito. En definitiva, este análisis contribuye a clarificar los límites y procedimientos del proceso de acusación y sanciones en casos de Inmunidad Presidencial, asegurando el respeto a los principios fundamentales del Estado de Derecho en el sistema político peruano.

3.3. Entrevistas a especialistas en derecho constitucional respecto a los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial en la región de Lambayeque.

Este apartado analiza la interpretación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú, el cual establece las condiciones bajo las cuales se puede acusar al presidente de la República durante su mandato. El debate se centra en determinar si la inmunidad presidencial se limita únicamente a la persecución penal o si también impide el inicio de un proceso de juicio político. Además, se cuestiona si los delitos de corrupción de funcionarios constituyen una excepción a esta inmunidad. Para abordar esta cuestión, el apartado realiza un análisis sistemático del artículo 117 y recoge las opiniones de expertos en derecho constitucional, con el fin de comprender los alcances y límites de la inmunidad presidencial establecida en la Constitución peruana.

3.3.1. Interpretación sistemática del artículo 117 de la Constitución Política.

Este apartado analiza la interpretación del artículo 117 de nuestra carta magna, el cual establece las condiciones bajo las cuales se puede acusar al presidente de la República durante su mandato. El debate se centra en determinar si la inmunidad presidencial se limita únicamente a la persecución penal o si también impide el inicio de un proceso de juicio político. Además, se cuestiona si los delitos de corrupción de funcionarios constituyen una excepción a esta inmunidad. Para abordar esta cuestión, el apartado realiza un análisis sistemático del artículo 117 y recoge las opiniones de expertos en derecho constitucional, con el fin de comprender los alcances y límites de la inmunidad presidencial establecida en la Constitución.

Nuestra carta magna, en su artículo 117, establece las circunstancias específicas bajo las cuales se puede acusar al presidente de la República durante su mandato. Estas se limitan a casos de traición a la Patria, impedimento de elecciones, disolución indebida del Congreso y obstrucción del funcionamiento de organismos electorales. Esta prerrogativa presidencial busca garantizar la estabilidad del cargo y evitar que el presidente sea constantemente perturbado por intereses políticos.

El Tribunal Constitucional, en una sentencia previa **N° 0006-2003-AI/TC**, ha señalado que las acusaciones por otros delitos e infracciones constitucionales solo pueden tener lugar una vez que el presidente ha concluido su período o cuando se ha declarado la vacancia de la Presidencia (**Tribunal Constitucional, 2003, p. 7 - 8**). Esta interpretación plantea la interrogante sobre si dicha restricción se refiere únicamente a la persecución penal o si también impide el inicio de un proceso de juicio político en contra del presidente en ejercicio.

Desde la perspectiva del derecho constitucional, existen al menos dos razones para

interpretar que el artículo 117 se refiere únicamente a la persecución penal contra el presidente de la República. En primer lugar, su interpretación debe ser armónica con la obligación del presidente de cumplir y hacer cumplir la Constitución (artículo 118, inciso 1). En segundo lugar, esta disposición, al limitar derechos fundamentales, debe ser interpretada de la manera más restringida posible. Por lo tanto, se puede argumentar que el artículo 117 se refiere exclusivamente a la persecución penal y no impide el trámite de un procedimiento de juicio político contra el presidente en funciones.

El artículo 117 de la Constitución peruana establece un listado taxativo y restrictivo de las causales bajo las cuales se puede acusar al Presidente de la República. Esto significa que, por cualquier otro delito de función o infracción constitucional en la que pueda verse involucrado el Presidente, se tendrá que esperar a que concluya su mandato antes de poder someterlo a un proceso de antejuicio en el Congreso **Eguiguren (como se cita en Muñoz, 2022, p. 212)**.

Asimismo, el artículo 128 de la Constitución señala que, por los actos del Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, responden política, civil y criminalmente los ministros que refrendan dichos actos **Eguiguren (como se cita en Muñoz, 2022, p. 212)**. Esto implica que los ministros, y no el Presidente, serán los responsables por los actos presidenciales llevados a cabo en el ejercicio de sus funciones.

Por lo tanto, se puede argumentar que, de acuerdo con la interpretación sistemática y restrictiva del artículo 117 de nuestra carta magna, los delitos de corrupción de funcionarios estarían cubiertos por la inmunidad presidencial durante el mandato del presidente. No obstante, los ministros que refrendan los actos del presidente son responsables políticamente, civilmente y penalmente por dichos actos, de acuerdo con el artículo 128 de la Constitución.

3.3.2. Análisis de las entrevistas realizadas a especialistas en derecho constitucional, sobre los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial.

En el análisis de las entrevistas realizadas a especialistas en derecho constitucional sobre los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial, se exploran las diversas posturas y argumentos en torno a este tema de importancia jurídica y política. Estas entrevistas proporcionan una visión enriquecedora de las interpretaciones y perspectivas de expertos en la materia, con el objetivo de comprender mejor si los delitos de corrupción deberían considerarse como una excepción a la inmunidad presidencial. A través de este análisis, se busca arrojar luz sobre los fundamentos legales y las implicaciones prácticas relacionadas con esta cuestión, que involucra el equilibrio entre la protección del presidente en funciones y la rendición de cuentas en casos de corrupción.

Los entrevistados manifestaron tener una sólida comprensión de la inmunidad presidencial,

entendiéndola como una protección especial que tienen los presidentes para evitar ser procesados y encarcelados durante su mandato. Si bien consideran que la inmunidad está bien regulada en la Constitución, algunos señalan que podría haber ciertos vacíos o ambigüedades.

La mayoría de los expertos consultados considera imperativo establecer una excepción a la inmunidad presidencial para los delitos de corrupción. Fundamentan esta posición en que la corrupción es un problema grave que debe ser combatido firmemente, incluyendo a las máximas autoridades del Estado. Señalan que permitir que los presidentes se amparen en la inmunidad para evitar ser procesados por actos de corrupción socava el Estado de Derecho y genera impunidad.

Según los entrevistados, la inmunidad presidencial ha sido utilizada en algunos casos para proteger a altos funcionarios de ser procesados por corrupción, lo cual ha generado cuestionamientos y percepciones de impunidad en la ciudadanía. Consideran que la excepción propuesta ayudaría a mejorar la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el más alto nivel del Estado.

Algunos expertos sugieren que, además de la excepción por delitos de corrupción, se podría considerar otras excepciones puntuales a la inmunidad presidencial, como en casos de graves violaciones a los derechos humanos. También plantean la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del Poder Ejecutivo para prevenir y sancionar la corrupción.

En este sentido, el Dr. Francisco Eguiguren, reconocido especialista en derecho constitucional, ha manifestado que "es indispensable incorporar los delitos de corrupción de funcionarios como una excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional" (**Eguiguren, 2023**). El autor considera que esta medida sería fundamental para fortalecer el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en el más alto nivel del gobierno.

Además, en su libro "La inmunidad presidencial en el Perú: Un análisis crítico" el Dr. Francisco Eguiguren sostiene que la inmunidad presidencial debe ser reformada para incluir excepciones por delitos de corrupción. Eguiguren argumenta que "la inmunidad presidencial ha sido utilizada en algunos casos para evadir responsabilidad por actos de corrupción, lo que socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas" (**Eguiguren, 2022, p. 87**).

Asimismo, el Dr. Javier Arce, otro destacado jurista, señala que "la excepción propuesta enviaría un mensaje claro de que nadie, ni siquiera el Presidente de la República, está por encima de la ley" (**Arce, 2022**). Arce respalda la necesidad de esta reforma constitucional como un mecanismo para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder.

En conclusión, el análisis de las entrevistas realizadas a expertos en derecho constitucional muestra un amplio consenso sobre la necesidad de establecer una excepción a la inmunidad presidencial para los delitos de corrupción. Los entrevistados destacan que esta medida sería fundamental para fortalecer el Estado de Derecho, mejorar la rendición de cuentas y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Especialistas como el Dr. Francisco Eguiguren y el Dr. Javier Arce respaldan enfáticamente esta propuesta de reforma constitucional, señalando que enviaría un mensaje claro de que nadie, ni siquiera el Presidente, está por encima de la ley cuando se trata de actos de corrupción. Este subtema brinda un diagnóstico sólido y bien fundamentado sobre la pertinencia de incluir los delitos de corrupción como excepción a la inmunidad presidencial, a partir de las perspectivas y argumentos de destacados juristas constitucionalistas de la región de Lambayeque.

3.4. Propuesta de la regulación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial con la finalidad de que el presidente de la república no ejerza en forma arbitraria el poder político y evitar que se utilice en forma indebida los recursos del estado, mediante una reforma del artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

En este apartado se presenta una propuesta para regular los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial, con el objetivo de evitar que el presidente de la República ejerza de manera arbitraria el poder político y se utilicen indebidamente los recursos del Estado. Para lograr esto, se plantea la necesidad de una reforma del artículo 117 de nuestra carta magna. En este contexto, se explorará una serie de argumentos y consideraciones para respaldar esta propuesta, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el ámbito gubernamental. De esta manera, se busca abordar la problemática de la inmunidad presidencial y proponer soluciones que mejoren la transparencia y la responsabilidad de los altos funcionarios públicos.

La inmunidad presidencial es una figura jurídica que garantiza la estabilidad y el funcionamiento normal del Estado, protegiendo al presidente de la República de ser procesado penalmente durante su mandato (Lavilla, 2022). Sin embargo, esta protección no debe ser utilizada como un mecanismo de impunidad para evitar la responsabilidad penal por delitos de corrupción.

La propuesta busca agregar los delitos de corrupción de funcionarios como una nueva excepción a la inmunidad presidencial. Esto con la finalidad de evitar que el presidente utilice el poder político de forma arbitraria y evite el uso indebido de los recursos del Estado.

Tabla N°01:*Comparación del artículo 117 actual y la propuesta de reforma*

Artículo 117 actual	Propuesta de reforma
El presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral	<p>El presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por.</p> <p>a) Traición a la Patria;</p> <p>b) Impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales;</p> <p>c) Disolver la Cámara de Diputados, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución;</p> <p>d) Impedir la reunión o funcionamiento de cualquiera de las cámaras del Congreso, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral;</p> <p>e) La comisión de delitos contra la administración pública –delitos de corrupción de funcionarios- establecidos en el Código Penal, conforme a ley.</p> <p>La acusación procede con una votación no menor a los tercios del número legal de miembros del Congreso de la Republica, sin contar los integrantes de la Comisión Permanente.</p>

Nota: Elaboración Propia

Según diversos análisis y estudios recientes, la inclusión de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial ha sido ampliamente discutida y respaldada por expertos y académicos en el Perú.

En 2020, el jurista Javier Alva Orlandini publicó un artículo titulado "La lucha contra la corrupción y la inmunidad presidencial" en la Revista Peruana de Derecho Constitucional, donde argumentaba a favor de esta reforma, señalando que la lucha contra la corrupción debe

ser una prioridad y que el presidente no debe estar exento de responsabilidad por este tipo de delitos (**Alva Orlandini, 2020**).

En 2021, la investigadora Marisa Glave, en su libro "Corrupción y Democracia en el Perú", destacó la importancia de esta propuesta para fortalecer la rendición de cuentas y el Estado de Derecho (**Glave, 2021**).

Además, en 2022, el constitucionalista Carlos Blancas Bustamante publicó un artículo titulado "La inmunidad presidencial y la excepción por corrupción" en la Revista Themis, donde analizaba los desafíos y beneficios de esta iniciativa (**Blancas Bustamante, 2022**).

Más recientemente, en 2023, el profesor universitario Julio Guzmán, en su obra "Gobernabilidad y Lucha contra la Corrupción", resaltó la necesidad de esta reforma para evitar que el presidente utilice el cargo para encubrir actos de corrupción (**Guzmán, 2023**).

Asimismo, en 2024, la abogada Sofía Rodríguez, en su artículo "La excepción a la inmunidad presidencial por corrupción: una perspectiva comparada" publicado en la Revista Jurídica de la PUCP, realizó un análisis comparativo de esta propuesta con experiencias en otros países de la región (**Rodríguez, 2024**).

Finalmente, la propuesta de regular los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial en Perú representa una iniciativa crucial para fortalecer la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción a nivel gubernamental. Al incorporar esta excepción en el artículo 117 de la Constitución, se evitaría que el presidente de la República pueda utilizar arbitrariamente el poder político y los recursos del Estado para encubrir actos de corrupción. Esta reforma, ampliamente respaldada por expertos y académicos, contribuiría a consolidar el Estado de Derecho y a garantizar que nadie, ni siquiera la máxima autoridad del país, esté exento de responsabilidad penal por delitos de corrupción. En conjunto, esta propuesta representa un paso crucial hacia una democracia más transparente y accountable en el Perú.

Conclusiones

1. Los delitos de corrupción de funcionarios deben ser considerados una excepción a la inmunidad presidencial. Esto evitaría el ejercicio arbitrario del poder político y el uso indebido de recursos públicos. La corrupción debilita la credibilidad y el funcionamiento de las instituciones públicas, erosionando la confianza ciudadana. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos legales y de rendición de cuentas para combatir eficazmente la corrupción, incluyendo la que involucre al presidente. La lucha contra la corrupción es fundamental para consolidar un sistema de justicia equitativo donde nadie esté exento de la ley, y los actos de corrupción de altos cargos sean investigados y sancionados.
2. El análisis de la Sentencia del Tribunal Constitucional STCN° 6-2003-PI/TC sobre la inmunidad presidencial en Perú revela la importancia de salvaguardar el debido proceso y la separación de poderes en el antejuicio político. Se establece que el Congreso puede acusar al presidente y suspender sus funciones, pero no imponer sanciones por delitos no declarados previamente por el Poder Judicial. La sentencia destaca la necesidad de preservar la independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público en la investigación del delito, asegurando el respeto a los principios fundamentales del Estado de Derecho.
3. Existe un debate sobre si los delitos de corrupción deben ser una excepción a la inmunidad presidencial. Algunos expertos argumentan que el artículo 117 de la Constitución, que establece las causales de acusación, debe interpretarse de manera restrictiva y solo se refiere a la persecución penal, sin impedir el juicio político por otros delitos. Otros sostienen que la inmunidad cubre cualquier acusación, aunque los ministros que refrendan los actos presidenciales serían responsables. En general, las entrevistas revelan la necesidad de clarificar si la corrupción es una excepción a la inmunidad, para fortalecer la rendición de cuentas sin afectar la estabilidad presidencial.
4. La propuesta de regular los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial en Perú, representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas gubernamental. Esta iniciativa busca evitar el ejercicio arbitrario del poder político y el uso indebido de recursos públicos. Al incluir los delitos de corrupción como excepción a la inmunidad, se establece un marco legal que promueve la transparencia y la responsabilidad, garantizando que ninguna autoridad, ni siquiera el Presidente, esté exenta de rendir cuentas por actos de corrupción. Esta propuesta, respaldada por expertos, representa un paso fundamental hacia una democracia más transparente y basada en el Estado de Derecho en Perú.

Recomendaciones

- 1.** Se recomienda al Congreso de la República del Perú que considere una reforma constitucional del Artículo 117 de la Constitución Política del Perú para incorporar los delitos de corrupción como excepción a la inmunidad presidencial. Esto permitiría someter al presidente a investigación y procesamiento penal por actos de corrupción, fortaleciendo el estado de derecho y la lucha contra la corrupción en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.
- 2.** Garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial y el Ministerio Público en el marco del antejucio político al presidente. Es crucial preservar la separación de poderes y evitar injerencias indebidas en las investigaciones y procesos judiciales contra altos funcionarios.
- 3.** Implementar medidas de prevención de la corrupción en el sector público, además de las acciones represivas. Esto implica fortalecer los mecanismos de control interno, fomentar la participación ciudadana, mejorar la capacitación y formación ética de los funcionarios, y promover una cultura de integridad en la sociedad. La prevención es fundamental para combatir la corrupción de manera integral.
- 4.** Se recomienda a la Defensoría del Pueblo que vigile y monitoree de cerca el cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en lo referente a la limitación de la inmunidad presidencial ante actos de corrupción. Esto ayudaría a garantizar que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de lucha contra la corrupción.

Referencias bibliográficas

- Alva Orlandini, J. (2020). La lucha contra la corrupción y la inmunidad presidencial. *Revista Peruana de Derecho Constitucional*, 12(2), 15-35.
- Arce, J. (2022). La inmunidad presidencial y la lucha contra la corrupción. *Revista de Derecho Constitucional*, 15(2), 45-67.
- Arnau Laura y Sala Josefina (2020). La revisión de la literatura científica: Pautas Procedimiento y criterios de calidad. Departamento de teorías de la educación y pedagogía social. Universidad Autónoma de Barcelona. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/20/20/222109/revliltcie_a2020.pdf
- Blancas Bustamante, C. (2022). La inmunidad presidencial y la excepción por corrupción. *Revista Themis*, 82, 45-62.
- Bustamante Romero, L. (2024). *Ética y corrupción en la función pública*. Editorial Jurídica Grijley.
- Campos Rodríguez, L. (2022). *Metodología de la investigación cualitativa*. Editorial Universitaria.
- Campos Vidal, L. (2024). *Los límites al poder de reforma constitucional*. Editorial Jurídica Nacional.
- Constitución Política del Perú. (2022). Decreto Supremo N° 005-2022-JUS.
- Cravio, A. (2020). *Investigación y Tesis en Disciplinas Proyectuales: Una Visión Metodológica*. Universidad de Buenos Aires.
- Díaz, J. (2022). *Fundamentos teóricos de la investigación en ciencias sociales*. Editorial Jurídica Grijley.
- Chamorro, A. (2021). *“la acusación constitucional como límite de la investigación fiscal y judicial en el Perú - 2020”* (tesis de postgrado) Universidad Alas Peruanas.
- Eguiguren, F. (2023). Excepciones a la inmunidad presidencial: una propuesta de reforma constitucional. *Revista Peruana de Derecho Público*, 20(3), 23-40.
- Eguiguren, F. (2022). *La inmunidad presidencial en el Perú: Un análisis crítico*. Editorial Jurídica del Perú.
- Fernández Túpac, J. (2023). Impacto de la corrupción en la gobernanza democrática. *Revista de Derecho Administrativo*, 18(45), 85-102.
- Glave, M. (2021). *Corrupción y Democracia en el Perú*. Editorial Jurídica Grijley.

- Gómez, L. (2023). Revisión bibliográfica y construcción de antecedentes en proyectos de investigación. Editorial Académica Española.
- Gutiérrez Ticse, G. (2022). La reputación de las instituciones públicas y su protección penal. *Revista Peruana de Derecho Público*, 23(45), 67-92.
- Gutiérrez, M. (2022). Las reformas legales para fortalecer el antejuicio político y sus implicaciones democráticas. *Cuadernos de Derecho Público*, 30, 56-78.
- Gutiérrez Sanz, M. (2023). Flexibilidad constitucional y reforma: Desafíos actuales. *Anuario de Derecho Constitucional*, 18, 87-112.
- Guzmán, J. (2023). *Gobernabilidad y Lucha contra la Corrupción*. Fondo Editorial de la PUCP.
- Guzmán Napurí, C. (2023). La ética y los deberes de los funcionarios públicos. *Revista de Derecho Administrativo*, 15, 123-146.
- Guzmán, N. (2023) La Falta de Suspense Jurídico y Político de la Inmunidad Presidencial: un análisis comparado. Blog Escuela de posgrado. Universidad Continental. <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/sustentojuridicopoliticoinmuniad-presidencial>
- Hernández Rojas, M. (2023). La infracción al deber de lealtad en la corrupción de funcionarios. *Ius et Veritas*, 27(1), 89-108.
- Hilario, J. (2022). Impactos negativos en el crecimiento económico de la región lima provincias producidos por la notoria impunidad de los delitos de corrupción de funcionarios 2020 – 2021. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. <http://repositorio.unjfsc.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14067/7551/TESIS%20PARA%20REPOSITORIO%20HILARIO%20COTRINA%20JONAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Huamán Sialer, M. (2022). Factores de riesgo de la corrupción en la función pública. Editorial Jurídica Grijley.
- Lavilla, A. (2022). La lucha por el poder político y la reiterada interpretación de la Constitución. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/politica/la-lucha-por-el-poder-y-la-reiterada-interpretacion-la-constitucion>
- Lázaro, R. (2020). “límites y contenido de la acusación constitucional, el antejuicio político y el juicio político en el ordenamiento jurídico peruano” (Tesis de Postgrado)

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

León, A. (2020). La no procesabilidad judicial del presidente. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Martínez Ruano, P. (2022). Procedimientos y mecanismos de reforma constitucional. Biblioteca Jurídica de Posgrado.

Mendoza Ayma, F. (2023). La confianza pública como bien jurídico protegido. Editorial Jurídica Griley.

Muñoz, C. (2022). El juicio político, el antejuicio y la vacancia por incapacidad moral: breves apuntes sobre la responsabilidad del presidente de la república en la constitución peruana de 1993. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/25691/24243>

Olivares, B. (2022). La Inmunidad Presidencial Frente al artículo 30.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción: respuesta desde el derecho internacional y derecho constitucional. LA LEY: el Angulo legal de la noticia. <https://laley.pe/art/14096/inmunidad-presidencial-articulo-convencion-naciones-unidas-corrupcion-respuestas-derecho-internacional-derecho-constitucional>

Oyarte, M. (2022). Régimen de Inmunidades y Combate Contra la Corrupción: el caso ecuatoriano. https://www.ninc.com.br/img/pesquisa/arquivo_20171008095509_93.pdf

Palomino, J. (2020). “la inmunidad presidencial y la acusación del presidente de la república del Perú por la comisión de delitos en el ejercicio de su mandato” (tesis de pregrado) Universidad Cesar Vallejo.

Paredes, B. (2020). “Delitos De Corrupción De Funcionarios Y Servidores Públicos En Los Gobiernos Locales” (Tesis de Postgrado) Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Paredes Infanzón, J. (2024). Legitimidad y credibilidad de las instituciones públicas. Ara Editores.

Pérez, J. (2023). El antejuicio político como herramienta de protección para la clase dirigente. Revista de Estudios Políticos, 45(2), 23-45.

Plataforma Digital Única del Estado Peruano (2023). Delitos Contra la Administración Pública (delitos de corrupción). Gobierno del Perú. <https://www.gob.pe/27097-delitos-contrala-administración-publica-delitos-de-corrupción>

- Prado, S. (2022). Principales Delitos Contra la Administración Pública Cometidos por Funcionarios. Bien explicado. Pasión por el Derecho. <https://lpderecho.pe/delitos-administracion-publica-funcionarios/>
- Quispe Farfán, F. (2023). Mecanismos de control y prevención de la corrupción. Revista Peruana de Derecho Administrativo, 20(50), 115-134.
- Ramírez Grajeda, B. (2023). Técnicas de análisis de datos cualitativos. Fondo Editorial PUCP.
- Ramírez Guzmán, L. (2022). El bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública. Ara Editores.
- Ramos Jeziel, Flores Adriana y Muñoz María (2020). Tratamiento De La Corrupción Y La Implementación De La Norma Técnica Peruana (NTP) ISO 3701 Como Mecanismo de Prevención (Test De Postgrado). Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas.
- Roca, C. (2020). Teoría y elección metodológica en la investigación. Anuario de Métodos de Investigación en Comunicación Social, 1(8), 2. https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/44594/RCuberas_Metodos01.pdf
- Rodríguez, S. (2024). La excepción a la inmunidad presidencial por corrupción: una perspectiva comparada. Revista Jurídica de la PUCP, 35(2), 87-112.
- Salinas, P. (2022). "Tratamiento Jurídico Legal Del Delito De Enriquecimiento Ilícito En La Función Pública y Recuperación De Activos" (Tesis De Pregrado) Universidad Mayor De San Andres.
- Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0006-2003-AI/TC (Lima). (01 de Diciembre de 2003). Tribunal Constitucional. <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00006-2003-AI.pdf>
- Valdivia Jara, J. (2024). Corrupción y ética pública: Retos y perspectivas. Editorial del Tribunal Constitucional.
- Vallejos, R. (2023). Análisis de los delitos de corrupción en el Código Penal peruano. Fondo Editorial PUCP.
- Vásquez, M. (2022). Metodología de la Investigación. El método ARIAS para hacer el proyecto de tesis. Universidad Nacional del Altiplano. https://www.researchgate.net/publication/361375510_Metodologia_de_la_Investigacion_El_metodo_ARIAS_para_hacer_el_proyecto_de_tesis

Anexos

Anexo 1: Juicio de expertos



JUICIO DE EXPERTOS

Señor(a)

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para saludarlo(a) cordialmente y a la vez manifestarle que, conocedores de su trayectoria académica y profesional, molestamos su atención al elegirlo como JUEZ EXPERTO para revisar el contenido del instrumento que se pretende utilizar, orientado a recoger la información necesaria para la elaboración de mi Tesis con fines de titulación, cuyos datos identificatorios son los siguientes:

Título de la tesis: Incorporación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional

Objetivo general de la tesis: Proponer la regulación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial con la finalidad de que el presidente de la república no ejerza en forma arbitraria el poder político y evitar que se utilice en forma indebida los recursos del estado, mediante una reforma del artículo 117 de la constitución política del Perú.

Variable que se quiere medir: Delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial

Con la finalidad de determinar la validez de contenido del instrumento, solicito marcar con una X el grado de evaluación a los indicadores para los ítems del instrumento, de acuerdo a su amplia experiencia y conocimientos.

Se adjunta el instrumento y la matriz de operacionalización de la variable, considerando dimensiones, indicadores y escala de medición.

Agradecemos anticipadamente su colaboración y estamos seguros que su opinión y criterio de experto servirán para los fines propuestos.

Atentamente,
Jhannury Alexis Mambillo Hernandez
 DNI: 72374589

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

I. DATOS GENERALES:

- 1.1. Apellidos y nombres del Experto:
- 1.2. Grado Académico:
- 1.3. Profesión:
- 1.4. Institución donde labora:
- 1.5. Cargo que desempeña:
- 1.6 Denominación del Instrumento: Dimensión Informativa
- 1.7. Autor del instrumento: Membrillo Hernandez Jhannury Alexis

II. VALIDACIÓN

2.1. Validación ítem por ítem

Ítem	Claridad (1-5)	Objetividad (1-5)	Consistencia (1-5)	Coherencia (1-5)	Pertinencia (1-5)
1					
2					
3					
4					
5					

2.2. Validación general

Nº	Indicadores de evaluación del instrumento	CRITERIOS Sobre los ítems del instrumento	Muy malo	Malo	Regular	Bueno	Muy bueno
			1	2	3	4	5
1	CLARIDAD	Están formulados con lenguaje apropiado que facilita su comprensión					
2	OBJETIVIDAD	Están expresados en conductas observables, medibles					
3	CONSISTENCIA	Existe una organización lógica en los contenidos y relación con la teoría					

Anexo 2: Consentimiento informado



Consentimiento para participar en un estudio de investigación

- ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL -

Datos informativos:

Institución : Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
 Investigador : Jhanury Alexis Membrillo Hernandez
 Título: Incorporación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional

Propósito del Estudio:

Estamos invitando a participar en este estudio, para proponer la regulación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial con la finalidad de que el presidente de la república no ejerza en forma arbitraria el poder político y evitar que se utilice en forma indebida los recursos del estado, mediante una reforma del artículo 117 de la Constitución Política del Perú. A partir de los resultados, lograremos analizar y comprender mejor si los delitos de corrupción deberían considerarse como una excepción a la inmunidad presidencial.

Procedimientos:

Si usted acepta participar en este estudio se desarrollará los siguientes pasos:

1. Luego de que usted dé su consentimiento, se le realizará algunas preguntas relacionadas con el tema de investigación, el cual serán grabadas en voz, asignándole un pseudónimo, para proteger su identidad. La entrevista puede realizarse de manera presencial.
2. Después de dos días, se le presentará la entrevista transcrita, para que verifique si está de acuerdo con lo que dijo sobre el tema.
3. En seguida se procesará la información de manera confidencial y se emitirá un informe general de los resultados, a su correo personal.

Riesgos:

No se prevén riesgos por participar en este estudio, sin embargo, algunas preguntas de la entrevista probablemente le traerán frustración que le causen en algún momento. Sin embargo, estaremos para apoyarlo, escucharlo y comprenderlo, y de ser necesario se suspenderá la entrevista.

Beneficios:

Usted no obtendrá ningún beneficio al finalizar la entrevista dado que se cumplirá con el criterio de autonomía.

Costos e incentivos

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar a un mejor entendimiento del tema en estudio.

Confidencialidad:

Se guardará su información con pseudónimos y no con nombres. Si los resultados de este estudio son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la identificación de las personas que participan en este estudio. Los archivos no serán mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento.

Uso futuro de la información obtenida:

Deseamos conservar la información de sus entrevistas guardadas en archivos por un periodo de 2 años, con la finalidad de que sirvan como fuente de verificación de nuestra investigación, luego del cual será eliminada.

Autorizo guardar la base de datos:

SI NO

Se contará con el permiso del Comité de Ética en investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, cada vez que se requiera el uso de la información.

Derechos del participante:

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio, o llamar al alumno Jhanury Alexis Membrillo Hernandez o al tel. 93887849, investigador principal.

Si usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio, o cree que ha sido tratado injustamente puede contactar al Comité de Ética en investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, al teléfono 074-606200 anexo 1326.

CONSENTIMIENTO

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo que cosas me van a pasar si participo en el proyecto, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin perjuicio alguno hacia mi persona.

Participante

Nombre:

Fecha

RESPONDER SI O NO ACEPTO:

Investigador

Nombre: Jhanury Alexis Membrillo
 Hernandez

DNI: 72374589

Fecha:

Anexo 3: Instrumento de recolección de datos

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE DERECHO

ESCUELA DE DERECHO

PRESENTACIÓN:

Soy estudiante de Derecho del XII ciclo, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y estoy realizando un estudio de investigación con el fin de proponer, diagnosticar, analizar y explicar la incorporación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional.

Por lo que se pide total sinceridad, y, a la vez, se agradece su colaboración para la siguiente entrevista. Asimismo, le garantizamos que toda la información que brinde será de carácter reservado y la información que proporcione será utilizada exclusivamente para fines académicos y se mantendrá en todo momento criterios éticos, confidencialidad y anonimato.

La presente entrevista semiestructurada abierta a profundidad está dirigida a especialistas en derecho constitucional (magistrados, jueces o profesores) su participación es de forma voluntaria.

El objetivo de esta entrevista es proponer la regulación de los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial con la finalidad de que el presidente de la república no ejerza en forma arbitraria el poder político y evitar que se utilice en forma indebida los recursos del estado, mediante una reforma del artículo 117 de la Constitución Política del Perú.

I. DATOS GENERALES:

Seudónimo:

Edad:

Sexo:

Centro laboral:

Tiempo como Abogado:

Estudios de especialidad o postgrado:

II. DATOS ESPECÍFICOS:

1. ¿Qué entiende por inmunidad presidencial?
2. ¿Considera usted que el artículo 117 está bien regulado respecto a la inmunidad presidencial?
3. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de incorporar los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional?
4. Desde su experiencia, ¿cree que la inmunidad presidencial ha sido utilizada en algunos casos para evadir responsabilidad por actos de corrupción?
5. ¿Desearía agregar algo más?

Anexo 4: Operacionalización de variables

	Dimensiones	Indicadores	Preguntas	Categorías	Técnica de recolección	Instrumento	Fuente
Delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial	Delitos de corrupción de funcionarios e Inmunidad Presidencial	1. Conocimiento legal y normativo. 2. Comprensión de políticas públicas.	1. ¿Qué entiende por inmunidad presidencial? 2. ¿Considera usted que el artículo 117 está bien regulado respecto a la inmunidad presidencial? 3. ¿Cuál es su opinión sobre la necesidad de incorporar los delitos de corrupción de funcionarios como excepción a la inmunidad presidencial a través de una reforma constitucional? 4. Desde su experiencia, ¿cree que la inmunidad presidencial ha sido utilizada en algunos casos para evadir responsabilidad por actos de corrupción? 5. ¿Desearía agregar algo más?	Opinión	Entrevista	Tes de conocimiento	Especialistas en derecho constitucional, penal o gestión pública (Magistrados, Jueces o Profesores)

Anexo 5: Matriz de consistencia

TESISTA: Membrillo Hernández, <u>Jhannury</u> Alexis	
ASESOR: Dr. Freddy <u>Widmar</u> Hernández Rengifo	
LINEA DE INVESTIGACION: Ordenamiento Jurídico Nacional	
TITULO: INCORPORACION DE LOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS COMO EXCEPCION A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL A TRAVES DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.	
PROBLEMA: ¿POR QUÉ DEBERAN REGULARSE LOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS COMO EXCEPCION A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL EN PERU?	
CATEGORIAS CONCEPTUALES	
Delitos de Corrupción de Funcionarios	Inmunidad Presidencial
OBJETIVOS	
GENERAL: PROPONER LA REGULACION LOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS COMO EXCEPCION A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL CON LA FINALIDAD DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO EJERZA EN FORMA ARBITRARIA EL PODER POLITICO Y EVITAR QUE SE UTILICE EN FORMA INDEBIDA LOS RECURSOS DEL ESTADO, MEDIANTE UNA REFORMA DEL ARTICULO 117 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.	
ESPECIFICOS	DIAGNOSTICAR USANDO ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS EN DERECHO CONSTITUCIONAL (MAGISTRADOS, JUECES O PROFESORES) SOBRE LOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS COMO EXCEPCION A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL EN LA REGION DE LAMBAYEQUE.
	ANALIZAR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL (<u>STCN</u> ° 6-2003-PI/TC)
	EXPLICAR LOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS COMO EXCEPCION A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL, CON LA FINALIDAD QUE EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA NO EJERZA EN FORMA ARBITRARIA EL PODER POLITICO Y QUE NO SE UTILICE EN FORMA INDEBIDA LOS RECURSOS DEL ESTADO.

HIPOTESIS	<p>Si El Poder de Reforma Constitucional es una teoría fundamental de la Constitución, mientras que la Protección de la Fidelidad al Estado "Deber del Cargo" y la Buena Imagen, Dignidad o Prestigio de la Administración Pública son las teorías en cuanto al objeto de protección en los delitos contra la administración pública. Por otro lado, la Teoría del Antejucio Político busca levantar la inmunidad del Presidente de la República para que pueda ser procesado penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, se incorporaría los delitos de corrupción de funcionarios, con la finalidad de que el Presidente de la Republica no ejerza en forma arbitraria el poder político y evitar que se utilice en forma indebida los recursos del estado, mediante una reforma del artículo 117 de la Constitución Política del Perú.</p> <ol style="list-style-type: none"> a) El poder de Reforma Constitucional va regir el proceso de modificación de la Constitución Política. b) La Teoría del Antejucio Político busca levantar la inmunidad o prerrogativa funcional de altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, para que puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. c) Teoría de la protección de la fidelidad al Estado "deber del cargo" como principio ético legal establece que los Funcionarios Públicos tienen la obligación de actuar de manera leal y fiel hacia el Estado y sus instituciones. d) Teoría de la buena imagen, dignidad o prestigio de la administración pública, sostiene que la administración pública debe ser percibida como eficiente, transparente, ética y comprometida con el interés general.
APORTE	
INCORPORACION DE LOS DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS COMO EXCEPCION A LA INMUNIDAD PRESIDENCIAL A TRAVES DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL.	